



Lo que destruyó la 4T cultural ¿se puede reconstruir?

por **Gerardo Ochoa Sandy**

Previo a la contienda electoral, el 19 de junio de 2018, Alejandra Frausto puso en circulación *El poder de la cultura*, documento de diez cuartillas con los ejes de lo que sería su política cultural. Entre otros aspectos, aceptaba que eran necesarias estrategias de inversión y de mecenazgo para beneficiar a las industrias culturales y las empresas creativas. De la misma manera, reconocía que los empresarios de la cultura —galeristas, teatreros, librerías, promotores, entre otros— requerían esquemas fiscales y financieros para su crecimiento, que pasaban por los créditos blandos de la banca de desarrollo, y que debían diseñarse en conjunto con las secretarías de Hacienda y de Economía. En tanto, los sismos de 2017 hacían necesaria la creación de un fondo especial para la reconstrucción, a la vez preventivo y prospectivo. Sin dudar, afirmaba que, si bien la diversidad cultural se encuentra en cada rincón del país, la política cultural estaba concentrada en la Ciudad de México y en unas cuantas zonas urbanas. “Esto tiene que cambiar”, sentenció. Nada de ello sucedió.

Pasadas las elecciones, el 8 de octubre inició un intento de ejercicio de consulta democrática a través de trece mesas temáticas y cinco ejes de diálogo. Al final se sumaron tres mesas más, que fueron canceladas sin explicación. El sitio *transicioncultura.mx*, el repositorio digital donde se conservarían las intervenciones de los participantes, desapareció. Fue lo primero pero no lo único que desaparecería. El 8 de enero de 2019, en la xxx Reunión de Embajadores y Cónsules de la SRE, Frausto comenzó a desaparecer el pasado, una constante desde entonces. En México, afirmó, “la cultura nunca había tenido un papel central en las políticas públicas”. Por tal razón, garantizó que no volvería a ser “nunca más un accesorio”. Llegó a asegurar que “antes de construir nueva infraestructura cultural, se dará mantenimiento a la ya existente” y reiteró que se crearía el fondo para los sismos. En esa ocasión, adelantó la creación del Consejo de Diplomacia Cultural, que presentó junto con el canciller Marcelo Ebrard el 16 de mayo en el Palacio de Bellas Artes, donde se anunció la firma de un convenio de colaboración entre las partes. En tres años y medio, ni un solo reporte al respecto.

En los hechos, la política cultural fue definida por López Obrador. El 2 de abril de 2019 anunció en su conferencia, acompañado de Gabriel Orozco, el “Proyecto Chapultepec. Naturaleza y Cultura”. Era la obra de infraestructura cultural sexenal y, para colmo, en la Ciudad de México, justo lo que había descartado tres meses antes la titular del sector. Para su financiamiento, se impondría un recorte del 25% anual al presupuesto de la Secretaría de Cultura. En tanto que también es un proyecto de carácter urbano y vial, buena parte de los recursos son canalizados al gobierno de la Ciudad de México. Las actividades del Complejo Cultural Los Pinos, ubicado dentro de la

demarcación, han ocasionado un recorte adicional anual a las instituciones culturales, que solo reciben asignaciones para desarrollar proyectos con la condición de presentarlos en ese lugar. Un proyecto bastó para devastar la política cultural.

Al año siguiente, López Obrador eligió también el 2 de abril para publicar en el *Diario Oficial de la Federación* un decreto que anunciaba la extinción de los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos y análogos. Las razones: operaban sin control ni fiscalización, no rendían cuentas e incurrían en corrupción. En consecuencia, los derechos y obligaciones derivados de tales instrumentos serían asumidos por los ejecutores de gasto correspondientes, con cargo a su presupuesto autorizado. El ejecutivo instruyó a los ejecutores de gasto para que a más tardar el 15 de abril concentraran los recursos en la Tesorería de la Federación. El dinero se fue a las pensiones que se reparten sin control, fiscalización ni rendición de cuentas, los servidores de la nación, a jóvenes, madres y ancianos. Ni entonces ni hasta la fecha el presidente ha presentado pruebas de sus acusaciones.

El 7 de abril de 2020, Frausto anunció la desaparición de seis fideicomisos que aplicaban para casos concretos. También se extinguía el Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural, Antropológico, Arqueológico e Histórico de México, Fideinah, que afectaba al patrimonio bajo la custodia del INAH. La extinción del Fondo de Desastres Nacionales, Fonden, crucial para la cobertura de los daños ocasionados por los sismos, acabó por dejar en el desamparo al instituto. Naturalmente, Frausto no cumplió con la creación del fondo para la reconstrucción que prometió en 2019 ante los embajadores y cónsules de México. Para el quinto aniversario de los sismos de 2017, tan solo habían sido restaurados el 65% de los inmuebles.

La comunidad salió a la defensa de los fideicomisos de alcance nacional: el Fonca (creado en 1989), el Foprocine (1997), el Fidecine (2001) y el Eficine (2006). El 17 de abril, Frausto informó que había prosperado la solicitud de excepción al decreto que se había presentado ante las secretarías de Hacienda y de la Función Pública. El Fonca se integraría a la estructura —convirtiéndose en el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales— para darle “certeza jurídica”, reglas claras que no dieran “espacio a la corrupción” y garantía presupuestal. En tanto se fusionarían Foprocine y Fidecine, asegurando que los apoyos comprometidos para la producción cinematográfica seguirían operando con normalidad y continuaría el estímulo fiscal a través de Eficine. Igualmente, continuaba el mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso.

Entonces comenzó la pesadilla. La entrega de los apoyos a los miembros del Sistema Nacional de Creadores —Creadores Eméritos, Creadores Artísticos y Jóvenes Creadores— comenzó a demorarse por lapsos de un mes y más. La secretaría aseguraba que no llegaban los recursos por razones administrativas, lo cual confirmaba que la certeza jurídica no era una garantía. Las nuevas reglas de operación, además, eran opacas. Los candidatos a los apoyos denunciaron que muchos de los jurados no contaban con trayectoria, como establecía la convocatoria. Los solicitantes que fueron descartados y presentaban su inconformidad, derecho contemplado en las reglas, no recibían respuesta.

El mismo trato recibían los cineastas. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas le escribió hasta en tres ocasiones a Frausto para hacerle saber que los cineastas no recibían las asignaciones. En la tercera misiva, del 7 de agosto de 2022, informó que los adeudos ascendían a más de 85 millones de pesos, lo cual había paralizado a más cincuenta

proyectos cinematográficos. Más de trescientos millones de pesos, correspondientes a Foprocine y Fidecine, no habían sido entregados a Imcine, como Frausto se había comprometido dos años atrás. El 24 de noviembre, la academia informó también la suspensión de la convocatoria de los Premios Ariel y afirmó que el Estado había renunciado a su responsabilidad con la industria y la cultura en general.

A consecuencia de la pandemia, el 23 de abril de 2020 se publicó en el DOF el decreto de austeridad, que implicó un recorte del 70% para los gastos de operación gubernamental. A la par, el presupuesto no ha dejado de desplomarse. En 2012, el último año del sexenio de Felipe Calderón, se aprobó un monto de 16 mil 663 mdp. Durante el gobierno de Peña Nieto, aunque hubo incrementos en 2013 y 2014, los recursos decrecieron durante el resto de su administración hasta los 12 mil 916 mdp de 2018. Para 2019, la 4T cultural arrancó con los 12 mil 394 mdp aprobados por la administración saliente. En 2020, aunque se asignaron 13 mil 517 mdp, se ejercieron 10 mil 681 mdp. Desde el 2020, comenzó la vampirización a causa de Chapultepec. Restándole a lo aprobado para el sector lo que se asigna al proyecto, en 2021 se asignaron 10 mil 477 mdp, el nivel más bajo en el sexenio. Para 2022 se contó con 11 mil 205 mdp y para este 2023 se contará con 12 mil 255 mdp, en ambos casos aumentos que se esfuman con la inflación.

Todo fue un engaño.

Mientras, se acrecientan los desafíos que se deberán encarar en el porvenir. La precarización de la planta laboral contratada como capítulos 2000 y 3000, sin reconocimiento a su antigüedad, que carece de seguridad social y pensiones para el retiro, y está sujeta a despidos disfrazados de no recontractaciones. Una infraestructura cultural, de la que había prometido Frausto ocuparse, devastada. Las industrias culturales, que no recibieron ningún apoyo durante la pandemia,

sin horizontes claros para su recuperación. Y los institutos de cultura de los estados, en el total abandono.

Lo que se construyó una vez, se puede construir de nuevo.

Lo principal es la regularización de la situación laboral de los trabajadores de la cultura, con los pagos y prestaciones adecuados, lo que implica la postergada reforma del sindicalismo cultural. Una inversión relevante en la infraestructura cultural existente, tal como prometió Frausto y no cumplió. Una reforma del INBAL, dándosele énfasis a sus compañías para que sean las voceras de las artes escénicas de México en el exterior, como parte central de la diplomacia cultural, y un resuelto apoyo a sus centros de investigación.

Las industrias culturales tienen una participación del 3% del PIB y no reciben el tratamiento fiscal adecuado para su potencial, por lo que son inaplazables los programas de inversión y exención total de impuestos por un plazo de seis años, previa apertura de convocatoria y calendarización de resultados. Los fideicomisos deben recuperar su estatus original y ampliarse a otros sectores. Los aumentos escalonados del presupuesto, también durante seis años, hasta alcanzar el 1% del PIB para el final del próximo sexenio. Las clases de cultura y artes, no solo con la finalidad de crear artistas sino de fomentar la sensibilidad para su disfrute, deben formar parte de la reforma educativa para alentar el consumo de la cultura y el arte a largo plazo.

Para ello, Morena debe dejar el poder. —

GERARDO OCHOA SANDY ha sido agregado cultural en las embajadas de México en la República Checa y Perú y en el Consulado General de México en Toronto. Entre sus libros se encuentra *80 años: las batallas culturales del Fondo* (Nieve de Chamoy, 2014), *Política cultural, ¿qué hacer?* (Raya en el Agua, 2001) y *La palabra dicha. Entrevistas con escritores mexicanos* (Conaculta, 2000).

La mentira como arma del poder

por Luis Antonio Espino

“Nos robaron la elección de 2006.” “Nos hicieron fraude en 2012.” “Regresaré al Ejército a sus cuarteles.” “Cancelamos el aeropuerto de Texcoco porque había mucha corrupción.” “Hay escasez de gasolina porque estamos combatiendo el huachicol.” “El gabinete de seguridad fue quien decidió liberar a Ovidio Guzmán.” “Se han ahorrado 1.5 billones de pesos gracias a la lucha contra la corrupción.” “Ya tenemos comprador para el avión presidencial.” “Nuestra estrategia de seguridad está funcionando.” “Había corrupción en las estancias infantiles, por eso las cancelamos.” “No se talará un solo árbol por el Tren Maya.” “La próxima semana tendremos medicamentos para los niños con cáncer.” “El AIFA es el mejor aeropuerto de América Latina.” “Salgan, abrácese, no pasa nada, no es tan fatal ese coronavirus.” “Ya no hay corrupción.” “Se acabaron las masacres.” “Ya domamos la pandemia.” “La maestra Delfina es una mujer honesta.” “Calumnian a Salgado Macedonio.” “López-Gatell merece reconocimiento mundial.” “Que se aplique la ley, aunque se trate de mi hermano.” “El récord en remesas es un logro para presumir.” “Soy el presidente más atacado en cien años.” “Tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca.” “No hay militarización.” “El INE hace fraudes electorales.” “No hay un país donde se estén aplicando tantas vacunas.” “Este es el gobierno que más ha apoyado a las mujeres.” “No somos iguales.” “Vamos muy bien.”

Se podrían llenar muchas páginas con las mentiras y las afirmaciones engañosas que a diario dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero él no ha pagado ningún costo jurídico, administrativo, político, social o diplomático por ello. Los medios siguen difundiendo lo que dice a diario, incluso cuando se ha demostrado su falta de veracidad. Los líderes empresariales aún dan crédito a lo que el presidente asegura. Los enviados de gobiernos extranjeros dicen en público que confían en su palabra. Y, en promedio, seis de cada diez ciudadanos siguen teniendo una opinión favorable de él, como muestran las encuestas. Al presidente no le interesa la verdad, pero esta tampoco parece tener muchos aliados.

Pregunte usted a cualquier ciudadano qué opina de que el presidente diga tantas mentiras y muy probablemente le responderá —con una mezcla de cinismo y resignación— que todos los políticos mienten. Pero hay tres factores que hacen diferentes y mucho más peligrosas las mentiras de López Obrador: su inmensa cantidad, la gravedad de sus efectos y, sobre todo, su motivación para mentir.

Comencemos por la cantidad. El conteo de la empresa SPIN-Taller de Comunicación Política registra que AMLO ha hecho casi 87 mil afirmaciones falsas, engañosas o que no están respaldadas por información pública hasta agosto de 2022, es decir, en poco más de tres años y medio de gobierno. Para comparar, el *Washington Post* contabilizó